

REF: ACCIÓN DE TUTELA N°257404089001 2024 00200 00

JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL DE SIBATÉ
Sibaté, quince de abril de dos mil veinticuatro

Se encuentran al Despacho las presentes diligencias a fin de proferir la decisión que en derecho corresponde respecto de la petición de acción de tutela instaurada por el señor PEDRO RAÚL RAMÍREZ ROA en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATÉ y las vinculadas JEFATURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATE.

ANTECEDENTES

El señor PEDRO RAÚL RAMÍREZ ROA, instauró ante este Despacho acción de tutela en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATÉ, solicitando se tutele el derecho fundamental de petición, debido proceso e igualdad.

Como fundamento de su petición el accionante narra los hechos indicando que el 1° de marzo de 2024, envió petición a la Secretaría de Movilidad de Sibaté, a fin de que fuese revisadas las actuaciones llevadas a cabo, en el proceso contravencional con respecto a una sanción en que supuestamente incurrió, la cual, según dicha secretaria, es la N°9233296 del 08/02/2011, o en su defecto, para que fuese aplicado el fenómeno de caducidad y/o prescripción que le dieron el radicado ASB2024ER002553.

Que transcurrido el término de Ley para que la Secretaría de Movilidad de una respuesta completa, coherente y de fondo a su petición, la misma no ha sido posible recibirla, puesto que, transcurrido más de un mes y medio de haber presentado la petición, dicha entidad, no se ha pronunciado respecto de la misma.

Afirma que denota la vulneración de sus derechos, específicamente el de petición y del debido proceso, siendo así, las razones por las que está acudiendo a esta vía gubernamental, ya que sus derechos fundamentales se le están vulnerando.

Pretende que se declare la vulneración al derecho fundamental de petición por parte de la Secretaría de Tránsito de Sibaté. Que se ordene a la Secretaría de Movilidad de Sibaté, dar respuesta de fondo y coherente con la normatividad vigente a la petición.

Funda su solicitud en los artículos 13, 29 y 86 de la Constitución Nacional, lo referente a la acción de tutela, Decreto 2591 de 1.991, Decreto 306 de 1.992 y demás normas reglamentarias y concordantes; Ley 1383 de 2013, artículo 135, 159 y 161 del Código Nacional de tránsito, Sentencia T-051 de 2016 y Sentencia C-038 de 2020.

Allega como pruebas el accionante lo relacionado en el acápite de pruebas y anexos.

Este Juzgado avoco conocimiento y dispuso por el medio más eficaz notificar en legal forma a la accionada y vinculadas, para lo cual se libraron las comunicaciones como obra en el expediente.

MÓNICA MARÍA CABRA BAUTISTA, actuando en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, ejerciendo su derecho a la defensa da respuesta a la acción de tutela planteada por el señor PEDRO RAÚL RAMÍREZ ROA.

Señala que la petición aludida por el accionante no fue radicada ante la Sede Operativa ni ante la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca atendiendo a que el radicado descrito (ASB2024EROO2553) por el accionante no corresponde al de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca. Que los radicados recibidos por esa Secretaría o cualquiera de sus Sedes Operativas tiene radicación numérica de diez dígitos, mismos que no coinciden con el registrado por el accionante en sus anexos.

Indica que se procedió a efectuar búsqueda en el Gestor documental mercurio, sistema de radicación de correspondencia de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca y todas las Sedes Operativas sin encontrar radicados a nombres del accionante, lo que demuestra que tampoco han conocido por traslado de dicha petición, por ende; no es cierta la afirmación presentada por el accionante, pues dicho escrito no fue radicado ante ellos.

Que el artículo 23 de la Carta garantiza el derecho fundamental de todas las personas a dirigirse ante las autoridades y eventualmente ante los particulares, para obtener respuesta de fondo a sus solicitudes de interés general o particular. Trae a colación la Sentencia T-377 de 2000 y Sentencia T-249 de 2001 reiterada por las sentencias T-1046 de 2004, T-180a de 2010, T-691 de 2010, T-161 de 2011.

Que la acción constitucional tuvo origen en la petición que hiciera el accionante el 1° de marzo de 2024.

Reitera que la petición no fue radicada en la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, atendiendo a que los correos electrónicos a los cuales hace alusión el accionante no corresponden al canal habilitado por la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca o Sedes Operativas para recepción de las mismas. Señala que tanto las Sedes Operativas como la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca cuentan con el único canal de atención: contactenos@cundinamarca.gov.co.

Indica que, en las pruebas allegadas por el accionante, pese a que aportan pantallazo de que fue enviado a un correo electrónico; no aporta prueba que demuestre que dicho correo fue recibido.

Que en ese sentido y teniendo en cuenta que la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca ni las Sedes Operativas de esa Secretaría no conocieron sobre la solicitud se configura lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-875 de 2010.

Indica que la Corte Constitucional en diferentes pronunciamientos ha determinado que se entiende por legitimación por activa en tutela y legitimación por pasiva en tutela. Refiere la sentencia T-597- 09.

Sostiene que la radicación no fue surtida ante esa Secretaría, pues no coincide con los números de radicado designados a la Gobernación de Cundinamarca, Secretaría de Transporte y Movilidad y, por ende; a la fecha no han conocido de la petición ni por radicación directa ni por traslado efectuado por alguna otra entidad., razón suficiente para determinar que existe una falta de legitimación en causa por pasiva.

Solicita se declare improcedente el amparo de la presente acción Constitucional, y como consecuencia se desvincule a esa Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca, atendiendo a que en el presente caso los términos para resolver de fondo la solicitud no han transcurrido.

Refiere la sentencia T-130/14.

Se tenga como pruebas las aportadas por el accionante y los pantallazos insertos en el escrito de contestación.

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ, indica que remitió la petición al competente, a los correos electrónicos: contactenos@cundinamarca.gov.co, por competencias Administrativas de esa entidad.

CONSIDERACIONES

En virtud al derecho constitucional establecido en el art. 86 de la Carta Magna el señor PEDRO RAÚL RAMÍREZ ROA, acude ante el juez a fin de que mediante un trámite preferencial y sumario se le tutele el derecho fundamental de petición, consagrado en la Constitución Política.

El art.1º preceptúa: "...Colombia es un estado Social de derecho organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general..."

Nuestra Carta magna en su art. 2 indica: "... Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, proveer la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo..."

El art. 23 preceptúa: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales".

El derecho de petición está consagrado en la carta magna para que todas las personas que han presentado peticiones obtengan una pronta respuesta.

De igual forma este derecho es aquel que tienen los ciudadanos de dirigirse a una autoridad, con la seguridad que van a recibir una respuesta pronta, oportuna sobre su pedimento, esta respuesta debe definir de fondo la solicitud elevada o por lo menos explicar con claridad las etapas, medios términos o procesos necesarios para dar una respuesta definitiva y contundente a quien la presentó, así se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, esa omisión en que incurre la autoridad al no responder las peticiones con la necesaria prontitud, es de por sí una violación al derecho de petición.

Como se ha pronunciado la Honorable Corte Constitucional, la naturaleza del derecho de petición, y en particular su núcleo esencial, como derecho fundamental objeto de protección tutelar, es la certidumbre de que, independientemente del contenido de lo que se solicita, se obtenga una respuesta oportuna y eficaz, es decir, que resuelva en su fondo lo pedido por el particular.

Igualmente, ha establecido la Honorable Corte Constitucional que el núcleo esencial de este derecho está determinado por la pronta respuesta o resolución a lo pedido, respuesta que se entiende dada cuando se resuelve de fondo la cuestión planteada, sin importar si es a favor o en contra de las pretensiones del solicitante y, en la efectiva notificación del acto, a través del cual, se resuelve la petición presentada.

Revisadas las presentes diligencias, observa este Despacho que del material probatorio que aparece relacionado y anexo al expediente, se puede concluir que el accionante allegó el escrito contentivo el derecho de petición en donde solicita se aplique la figura de la prescripción.

Del material probatorio que aparece relacionado y anexo al expediente, se puede concluir que el señor accionante en su escrito de tutela indica que radicó derecho de petición ante la Alcaldía Municipal de Sibaté, quien a su vez remitió la petición por competencia ante el organismo de tránsito, así mismo la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca indica que el señor accionante no probó la radicación ante las oficinas de tránsito y que revisado el sistema de esa entidad no se encontró petición alguna a nombre del accionante.

Como el derecho de petición fue allegado junto con el escrito de tutela en la notificación de la admisión de la petición de tutela, se tiene que en el presente caso los términos para resolver de fondo la solicitud no han transcurrido en su totalidad.

En este orden de ideas y como quiera que la accionada SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATÉ y la vinculada JEFATURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA a la fecha se encuentran dentro de los términos para dar respuesta al derecho de petición, puesto en conocimiento con la notificación de la admisión de la presente acción de tutela el pasado 2 de abril del año en curso, no se ha de tutelar el mismo por cuanto si bien el accionante allega el escrito del derecho de petición, no fue allegada la radicación ante el organismo de tránsito correspondiente.

Se insta a la accionada SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATÉ y vinculada JEFATURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA para que den contestación al derecho de petición puesto en conocimiento con la notificación del auto admisorio de la presente acción de tutela dentro del término de ley.

Esta decisión se ha de notificar por el medio más eficaz, advirtiéndole a la parte accionante, accionada y vinculada que la anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser así, se ha de remitir a la H. Corte Constitucional, para su eventual revisión.

En mérito de lo expuesto el Juzgado Promiscuo Municipal de Sibaté Cundinamarca, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

RESUELVE

Primero. NO TUTELAR el derecho petición consagrado en la Constitución Nacional, incoado por el señor PEDRO RAÚL RAMÍREZ ROA quien se identifica con la C.C.N°74.361.273 en contra de la SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATÉ y la vinculada JEFATURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

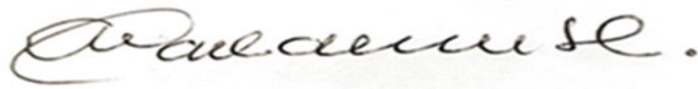
Segundo. Se insta a la accionada SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE OPERATIVA DE SIBATÉ y vinculada JEFATURA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD DE CUNDINAMARCA para que den contestación al derecho de petición puesto en conocimiento con la notificación del auto admisorio de la presente acción de tutela el pasado 2 de abril del cursante dentro del término de ley.

Tercero. Notifíquese la anterior decisión a la parte accionante, accionada y vinculada, mediante cualquier medio idóneo de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y Decreto 306 de 1992.

Cuarto. La anterior decisión es susceptible de impugnación, de no ser impugnada remítase a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Juez,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Martha Roció Chacón Hernández". The signature is written in a cursive style with a period at the end.

MARTHA ROCIÓ CHACÓN HERNÁNDEZ